

maíz editorial

En el número anterior de *maíz*, decíamos que la potencia democrática de los proyectos nacionales y populares que supo parir nuestra región se hallaba amenazada por los intentos restauracionistas de unas élites que no articulan más demandas que las del sistema financiero internacional, los medios oligopólicos de comunicación y el Poder Judicial. También que, en Argentina, el cambio de Gobierno no apuntaba a otra cosa que a eliminar la política redistributiva desplegada durante doce años y a restaurar las ideas e intereses de las minorías que históricamente obstaculizaron la posibilidad de un proyecto político emancipador, por los medios que fuere: desde el terrorismo de Estado hasta los grupos de tareas de hoy, esos que Cristina Fernández de Kirchner definió como un trípo-de de denuncia mediática, clivaje político y sectores del Poder Judicial articulando todo.

Desde entonces, hemos asistido a la feroz y cotidiana embestida de una corporación judicial tan acostumbrada a jugar un rol siniestro en la custodia de los privilegios como sus principales aliados, los medios concentrados, contra las expresiones más significativas de ese proyecto que tuvo la capacidad de articular demandas y manifestaciones de poder popular como camino indiscutido para la libertad y una justicia otra: la justicia social.

Lo vemos en la persecución permanente a nuestra ex presidenta a través del armado de causas penales que huelen poco a delito y mucho a venganza; venganza por haber generado la transformación de un orden favorable a los pocos de siempre con políticas que produjeron crecimiento económico con inclusión social y una profunda expansión de derechos individuales y colectivos, pero además por haber propuesto la democratización de un Poder Judicial carente de todo vínculo con la soberanía popular, sin la cual no hay posibilidad de distribuir riqueza para construir una nación socialmente justa. También, en el sistemático ataque a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, sin las cuales es imposible vivir en un país más justo, porque no hay condiciones de posibilidad para ello si se perpetúa la impunidad de los criminales (militares y civiles) que perpetraron el genocidio para imponer, precisamente, un orden social injusto. Y, finalmente, en la violenta ofensiva contra la militancia popular que luchó para hacer efectivas esas políticas y hoy resiste la arremetida judicial que busca pulverizar los dere-

chos y las autonomías conquistados.

No es necesaria más que una imagen para resumir los intereses políticos (los intereses, porque las convicciones son otra cosa) y la postura ideológica de ese sector del Poder Judicial que, curiosamente, se dice independiente e imparcial: mientras mantiene privada ilegal e ilegítimamente de su libertad (es decir, secuestrada) a Milagro Sala, una militante social que supo sacar de la marginación y la exclusión al pueblo indígena y a los más vulnerables en el norte de nuestro país, no sólo avanza sobre nuestras Madres con el intento de detención de Hebe de Bonafini, sino que persigue y presiona a los jueces y fiscales que se pusieron al hombro el juzgamiento de los crímenes contra nuestros 30.000 compañeros, al tiempo que otorga privilegios a los responsables materiales y civiles del exterminio, desde los que gozan los apropiadores de Papel Prensa o los dueños y directivos de *La Nueva Provincia*, hasta el beneficio de la prisión domiciliaria concedido a más de cincuenta represores.

Carlos Rozanski es uno de esos jueces contra los que la emprenden los integrantes del Poder Judicial que aspiran a la impunidad. Un juez de esos que no se anotan en el bando de los opresores ni de los neutrales y asumen con convicción su posicionamiento político y su profundo compromiso con las verdades y las injusticias del tiempo que habitamos. En ese camino, condenó a cadena perpetua a Miguel Etchecolatz y Christian Von Wernich, y fue el primero en dictar una sentencia considerando que los crímenes de lesa humanidad que tuvieron lugar durante la dictadura cívico-militar se cometieron en el marco de un genocidio planificado. En los últimos meses, sufrió la más nefasta persecución por parte del Consejo de la Magistratura (fomentada además por los medios) y el intento de destitución orquestado por sus miembros (esos que, sin representar la voluntad popular, pueden, paradójicamente, imponer sanciones disciplinarias y llevar a juicio político a jueces que sí lo hacen), a los cuales denunció antes de presentar su renuncia a fines de octubre.

En este número de *maíz* decidimos abrazarlo y hacer nuestras sus palabras, alcanzando a través de estas, también, a todos los trabajadores y trabajadoras judiciales que, como él, creen que vivir quiere decir tomar partido y que cada día hacen su tarea para que la Justicia sea, no un aparato punitivo al servicio de la minoría, sino la herramienta para defender, expandir y hacer efectivos nuestros derechos en democracia.